

¿ORDEN Y PROGRESO?

Oscar Oszlak

Hacia fines de 1990, el gobierno del Presidente Menem no conseguía imprimir un rumbo definido a sus políticas macroeconómicas. Tres ministros se habían sucedido sin encontrar un programa o modelo coherente, que transmitiera seguridad a los inversores. Las señales que se emitían desde el gobierno resultaban contradictorias: apuestas al dólar "recontraalto" se contraponían a la "bonexización" de la economía. Faltaban todavía algunos meses para que la gestión Cavallo asumiera las riendas de la economía e impusiera su "modelo".

La fórmula "ajuste y revolución productiva", que seguía siendo el lema del discurso oficial, me recordaba en esos momentos al antiguo "orden y progreso" que presidió, como fórmula fundacional, el desarrollo del capitalismo argentino y latinoamericano. Sólo que en esos momentos el ajuste sólo parecía debilitar al estado sin crear condiciones de estabilidad en las que pudieran enraizarse las fuerzas productivas. Y la "revolución productiva" era, por entonces, una expresión de deseos puramente retórica. En esas condiciones, ¿podía haber orden sin progreso?

Primero fue "orden y progreso", la vieja fórmula del credo positivista. Luego, transformada en tensión permanente de la expansión del capitalismo, fue sucesivamente rebautizada "seguridad y desarrollo", "estabilidad y crecimiento".

Hoy, en la Argentina, el dúo se denomina "estabilización y reactivación", o, más popularmente, "ajuste y revolución productiva". Así como en el siglo 19 había que generar condiciones de "orden" bajo las que pudiera prosperar la actividad económica, la consigna del momento tiene características similares: demostrar, mediante una serie de decisiones genéricamente denominadas "ajuste", que se está apuntando a crear un horizonte de previsibilidad, de permanencia de ciertas reglas del juego, que supuestamente deberían inducir a los agentes económicos a realizar la "revolución productiva".

Aunque el ajuste, versión actual del orden, no sea precisamente popular ni contribuya a afianzar el capital político del gobierno, constituye -al menos para el Presidente y algunos de sus colaboradores- el único camino posible para crear las condiciones de confianza bajo las cuales los empresarios harán la "revolución productiva", nuevo nombre del "progreso". Para ello, el "ajuste" no debe limitarse al ámbito económico-financiero. También debe alcanzar a los distintos planos de la actividad social.

Pero hay dos diferencias importantes con aquella etapa histórica en la que el país supo colocarse entre las primeras potencias mundiales. Una es el protagónico papel que le cupo al estado, tanto en la creación de las condiciones de "orden" como en el propio proceso de acumulación que originó el gran despegue económico. Hoy el estado ha resignado explícitamente, en el discurso y en los hechos, el segundo de estos roles: su desmantelamiento y virtual vaciamiento son prueba irrefutable. Pero además -y ésta es la otra diferencia- tampoco consigue convertirse en productor de confianza, en generador

de previsibilidad, en garante de reglas del juego estables, a pesar de sus desmañados esfuerzos.

Por momentos parece implantar como única o fundamental regla de juego el funcionamiento de los mágicos dedos de la mano invisible del mercado. Y por momentos, en cambio, interviene mediante drásticas medidas de ajuste, negando de tal modo la automaticidad de ese mecanismo.

El resultado es claro. A pesar del empeño puesto por el gobierno en emitir señales a los operadores económicos acerca de sus intenciones de estabilizar el marco en que desenvuelven su actividad, no consigue evitar la incoherencia de estas señales. Un día alienta a los exportadores a expandir su actividad, asegurando un tipo de cambio "recontraalto" mediante la promesa de no intervenir en ese mercado; pero luego se contradice "secando" la plaza financiera mediante la "bonexización" o el aumento de los encajes, que a su vez eleva la tasa de interés e, indirectamente, deprime el tipo de cambio. Su política de privatizaciones, que en los papeles debía reducir el déficit y allegar cuantiosos recursos al sector público, termina siendo un instrumento de liquidación del patrimonio estatal, de facilitación de pingües negocios sin contrapartida de riesgo y de transferencia de la carga del estado al conjunto de la sociedad, a través del "sinceramiento" de las tarifas.

Tiene razón el gobierno cuando afirma que es a los capitalistas a quienes compete hacer la "revolución productiva". Pero ello no ocurrirá mientras se insista en adicionar números romanos a planes de ajuste de corto plazo, sin emitir, simultáneamente, señales sobre el modelo económico futuro que se intenta implantar. No existe sociedad conocida en la que este modelo haya resultado del simple juego de oferta y demanda, y menos aún en economías abiertas al mundo.

El estado -en su estricta acepción de órgano de conducción política- no puede renunciar a señalar rumbos claros y reglas coherentes, es decir, un camino hacia la "revolución productiva". Débil y desmantelado como está, difícilmente pueda hacerlo. Hasta ahora, ha intentado crear un "orden" por vía del "ajuste". Pero está visto que ello no basta. Es posible que no haya progreso sin orden. Pero ¿habrá orden sin progreso?